

472 Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900 062917-9 DG 25 G 95 A 55 Linea Nat. 01 8000 111 210

MINJUSTICIA



CORREO CERTIFICADO 53

CORREO CERTIFICADO

REMITENTE

Nombre/ Razón Social
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO - MINISTERIO DE
JUSTICIA
Dirección: Calle 53 No. 13-27, Piso 7

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Código Postal: 110231414

Envío: RN959533790CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social:
JUEZ 17 ADMINISTRATIVO DE CALI

Dirección: CRA 5 # 12-42, ED.
BANCO DE OCCIDENTE

Ciudad: CALI

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Código Postal: 760044376

Fecha Pre-Admisión:

31/05/2018 16:37:33

Min. Transporte Luc. de cargo 0007001 del 20/05/2018
Min. TIC Res. Mesajeros Express 201857 del 03/03/2018

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2018

Señor

JUEZ DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE CALI

Doctor PABLO JOSÉ CAICEDO GIL

Carrera 5 No. 12-42 Edificio Banco de Occidente

Código 3 Oficina de apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali

Valle del Cauca

Info. Contestación demanda y poder

Radicado: 760013333017 2016 00368 00

Demandante: Jaime Romero y otros

Demandante: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto

Penitenciario y Carcelario INPEC

Medio de control: Reparación Directa

ALFREDO GÓMEZ GIRALDO, apoderado de la parte demandada, muy respetuosamente acude a su Despacho para hacer llegar escrito **CONTESTACION DEMANDA** y el **PODER** y sus anexos, otorgado por el doctor Óscar Julián Valencia Loaiza, Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, al suscrito, para que se sirva reconocerme personería.

Muy atentamente,

ALFREDO GÓMEZ GIRALDO
C.C. No. 6.422.715 de Restrepo Valle
T.P. No. 88.907 del C.S.J.

Anexo: Lo anunciado en el folio 1
Proyectó: Alfredo Gómez Giraldo
Ext18-0018911 del 10/05/2018

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

1-8

Al responder cite este número
OFI18-0015710-DJU-1500

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2018

Señor

JUEZ DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE CALI

Doctor **PABLO JOSÉ CAICEDO GIL**

Carrera 5 No. 12-42 Edificio Banco de Occidente

Piso 3 Oficina de apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali

Cali – Valle del Cauca

Asunto. Contestación demanda y poder

Radicado: 760013333017 **2016 00368 00**

Demandante: Jaime Romero y otros

Demandante: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Instituto

Penitenciario y Carcelario INPEC

Medio de control: Reparación Directa

ALFREDO GÓMEZ GIRALDO, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad pública del orden nacional domiciliada en la ciudad de Bogotá, D.C., lo cual acredito con el poder adjunto que para tal efecto me fue conferido, por medio del presente escrito me permito respetuosamente **CONTESTAR** la demanda de la referencia, para lo cual procedo así:

I. PRETENSIONES.

Sea lo primero manifestar que de conformidad con las razones de la defensa que propondré a continuación, el Ministerio de Justicia se **OPONE** a todas y cada una de las pretensiones de los demandantes.

II. HECHOS.

En cuanto a los hechos descritos en la demanda manifiesto que en razón a que el actor no hace manifestaciones claras, concretas y expresas respecto de acciones u omisiones en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho que denoten falla del servicio ora incumplimiento de las obligaciones a su cargo, no me constan aquellos y, por tanto, me atengo a lo que sea probado dentro del plenario.

III. RAZONES DE LA DEFENSA.

Atendiendo las pretensiones de la demanda y de la narración de cada uno de los hechos que fundamentan su pretensión, se evidencia que las mismas, van dirigidas única y exclusivamente contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por la muerte del señor JAIME ROMERO ARAMBURO (q.e.p.d.) cuando se encontraba con beneficio de prisión domiciliaria, presumiblemente por falta de atención médica oportuna, entidad que tiene patrimonio propio y capacidad jurídica para comparecer por sí sólo al proceso, por lo que respecta al Ministerio de Justicia y del Derecho se evidencia que no tiene dentro de sus funciones ninguna atribuida con el cuidado y protección de los internos de los centros penitenciarios y carcelarios del País o de las personas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria, por lo que se presenta respecto a la entidad que representó lo siguiente:

A: EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA.

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

2

B) INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO IMPUTABLE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (AUSENCIA DE NEXO CAUSAL.

C) IMPROCEDENCIA DE ATRIBUIRLE RESPONSABILIDAD AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO POR VÍA DE LA ADSCRIPCIÓN AL INPEC

Sobre cada uno de los argumentos de defensa me permito sustentarlos así:

A) EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA.

Revisado detenidamente el texto de la demanda allegado a esta cartera ministerial, salta a la vista que el Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene legitimación material en la causa por pasiva para responder de fondo sobre los hechos y eventuales perjuicios causados, toda vez que no existe relación real entre la entidad y las pretensiones que en su contra formulan los actores, razón por la cual no se configura una de las condiciones anteriores necesarias que habilitarían a esta entidad para manifestarse sustancialmente sobre el asunto en cuestión.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia y del Derecho no tiene asignada dentro de sus competencias legales establecidas en el Decreto 2897 de 2011, modificado por el Decreto 1427 de 2017 ninguna atribución relacionada con las funciones que desempeña el INPEC en el cuidado y protección de los internos de los centros carcelarios o de las personas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria, ni ninguna actividad administrativa que pueda evitar lo acontecido con el señor JAIME ROMERO ARAMBURO (q.e.p.d) cuya función que le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, en su calidad de establecimiento público del orden nacional creado mediante Decreto 2160 de 1992 por fusión de la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, posee personería jurídica propia y, por ello, es una entidad con capacidad procesal para ser sujeto pasivo de cualesquiera demandas y, llamada a responder directamente, por las acciones u omisiones de sus funcionarios que, eventualmente, hayan podido causar perjuicios.

El artículo 15 de la Ley 65 de 1993, Código Nacional Penitenciario y Carcelario, que establece que el

“Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como establecimiento público ... con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines”.

De otra parte, los artículos 31 y 36 *ibidem* consagran que la “... *vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional...*”; y que “... *El director de cada centro de reclusión es el jefe de gobierno interno...*”, respondiendo ante el Director del INPEC por el funcionamiento y control del establecimiento a su cargo.

Siendo así lo anterior y teniendo en cuenta que el INPEC posee personería jurídica propia que le otorga la capacidad procesal necesaria para acudir a juicio; en sana lógica jurídica se impondrá la absolución del Ministerio de Justicia y del Derecho por cuanto

Bogotá D.C., Colombia

ésta no fue la autoridad que intervino material y sustancialmente en los hechos u omisiones que, eventualmente, pudieron haber causado daños y perjuicios a los demandantes, máxime cuando cualesquiera deficiencias en la prestación del cuidado y protección de los internos reclusos en los centros carcelarios del País o de las personas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria, escapan a la órbita funcional de éste ministerio.

Normas constitucionales y legales que fundamentan la falta de legitimación material en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho.

- El artículo 113 de la Constitución Política señala que son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial y que "Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines".
- El artículo 123 ibídem, inciso segundo, dispone "Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento".
- El artículo 228 de la Constitución Política determina "La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes . . . Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo", en concordancia con el artículo 257 ibídem según el cual la administración de la Rama Judicial le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.
- En el mismo sentido el último inciso del artículo 249 de la Carta, prescribe: "... La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal".
- El artículo 162 del Código Contencioso Administrativo, establece los requisitos que toda demanda debe reunir ante la jurisdicción contencioso administrativa y en su numeral 1o. establece: "La designación de las partes y sus representantes".
- Así mismo el artículo 159 del Código Contencioso Administrativo, establece:

"Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación. (...)"

Jurisprudencia sobre la falta de legitimación material en la causa por pasiva.

Sobre la falta de legitimación material en la causa por pasiva, presupuesto necesario de la sentencia favorable, ha dicho lo siguiente el Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente Doctor Danilo Rojas Betancourth. Sentencia del 14 de octubre de Bogotá D.C., Colombia

2015. radicado 25000-2326-000-2012-01209-02 (31169). Acción de reparación directa. Demandante Luz Stella Barrera Martínez y otros. Demandado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otros, de la propia Sección Tercera:

"... finalmente, respecto a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, la sala encuentra que no se encuentra materialmente legitimado en la causa para comparecer al proceso debido a que, como bien lo señaló el Tribunal a-quo, la obligación de respetar y proteger la vida de los internos no recae en esta entidad, sino en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). ahora, si bien es cierto que el INPEC se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia, ello no significa que esta entidad lo represente porque el INPEC se encuentra constituido como un Establecimiento Público de carácter nacional con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 2160 de 1992..." (Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente Doctor Danilo Rojas Betancourth. Sentencia del 14 de octubre de 2015. radicado 25000-2326-000-2012-01209-02 (31169). Acción de reparación directa. Demandante Luz Stella Barrera Martínez y otros. Demandado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otros.

B) INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO IMPUTABLE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (AUSENCIA DE NEXO CAUSAL.

Uno de los elementos esenciales para que surja la responsabilidad administrativa es la existencia del nexo causal, es decir, el vínculo que debe existir entre hecho y daño antijurídico.

La explicación del vínculo causal en el sentido de determinar dentro de todas las posibles ¿cuál fue la causa eficiente que produjo un daño antijurídico?, ha sido dilucidada reiterativamente por doctrina y jurisprudencia mediante la aplicación de la Teoría de la Causalidad Adecuada, la cual básicamente sostiene que hay que precisar aquellas que sean realmente determinantes en la producción del resultado dañoso porque, solo quienes hayan originado esas causas determinantes, comprometen su responsabilidad.

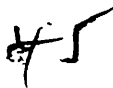
Sobre la teoría de la causalidad adecuada ha dicho el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Dra., María Elena Giraldo Gómez, en sentencia del 17 de junio de 2004, radicación número 44001-23-31-000-1996-0825-01 (15183), actor Elmer Francisco Vanegas Palmezano y Otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional:

"... Para que surja el deber de indemnizar con fundamento en el régimen de responsabilidad patrimonial previsto en el artículo 90 constitucional, ... , no es suficiente que el demandante haya sufrido un daño cierto, determinado o determinable y antijurídico y que contra quien se dirige la imputación haya incurrido en alguna conducta de irregularidad constitutiva de falla de aquellas alegadas por el actor, porque es necesario además que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de la falla de la Administración, nexo causal que para efectos de esta declaratoria no debe ser visto desde el punto de vista de la causalidad física perteneciente al mundo de los fenómenos naturales, sino desde el punto de vista jurídico, entendido como el estudio de la eficiencia de la conducta estatal en la causación de un daño desde el deber ser que prevé la norma para el Estado en relación con el administrado..."

Aterrizando las anteriores ideas al caso en cuestión, podemos observar que en el presente caso no existiendo relación real entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



las causas objetivas determinantes en la producción de los eventuales hechos dañosos que aducen la parte demandante, no existiría el suficiente y necesario vínculo causal que derive en su responsabilidad administrativa.

En efecto, las causas determinantes en la producción de cualesquiera hechos dañosos que eventualmente pudiera haber ocasionado perjuicios a la parte demandante, objetivamente refieren a conductas que la propia parte actora endilga al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC; razón suficiente para entender que no se le puede imputar al Ministerio de Justicia y del Derecho la realización de ningún hecho dañoso y, en consecuencia, tampoco acreditar el nexo causal indispensable para atribuirle responsabilidad, toda vez que la entidad no participó, contribuyó o realizó, directa ni indirectamente, los hechos eficientes materia del litigio y, por tanto, en cuanto a mi representada respecta, se vislumbra su completa y total absolución.

C) IMPROCEDENCIA DE ATRIBUIRLE RESPONSABILIDAD AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO POR VÍA DE LA ADSCRIPCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.

Sin perjuicio de los anteriores argumentos que por sí solos imponen la absolución de mi mandante judicial, a continuación me permito señalar las razones que jurídicamente harían improcedente relacionar, por vía de la figura de la adscripción administrativa, a la entidad que represento con los hechos eficientes materia del litigio que nos ocupa.

a. La adscripción del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC al Ministerio de Justicia y del Derecho no constituye ninguna clase de relación jerárquica funcional ni de subordinación entre aquella entidad y el Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que dicha figura hace relación a la orientación y controles sectorial y administrativo tendientes al desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio subordinado de facultades y competencias por parte de los entes adscritos.

b. El artículo 44 de la Ley 489 de 1998 establece que la

“... orientación del ejercicio de las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman un Sector Administrativo está a cargo del Ministro o Director del Departamento Administrativo a cuyo despacho se encuentren adscritos o vinculados, sin perjuicio de las potestades de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o de reestructuración, les correspondan”.

c. El artículo 104 de la Ley 489 de 1998 establece que el

“... control administrativo que de acuerdo con la ley corresponde a los ministros... se orientará a constatar y asegurar que las actividades y funciones de los organismos y entidades que integran el respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales...”.

d. A su turno, el artículo 105 *ibídem*, señala que el

“... control administrativo sobre las entidades descentralizadas no comprenderá la autorización o aprobación de los actos específicos que conforme a la ley compete expedir a los órganos internos de esos organismos y entidades...”.

e. De conformidad con lo anterior, es claro que el control administrativo que los ministros deben ejercer sobre las entidades adscritas a su cartera, tiende a fomentar el cumplimiento mancomunado de metas, planes y programas gubernamentales,

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

excluyendo *per se* la posibilidad de limitar o condicionar la autonomía administrativa que el correspondiente acto de creación les confirió y que, naturalmente, incluye la facultad libre e independiente de actuación relacionada con el cumplimiento de sus funciones, en este caso, la prestación del servicio de salud a los internos reclusos en establecimientos carcelarios o de las personas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria.

f. Sobre este particular la Corte Constitucional en Sentencia C-046 de 2004 señaló:

“... dentro de la competencia del legislador de determinar la estructura de la administración, se encuentra la de adscribir una entidad nacional en un Ministerio con el que guarde afinidad, salvo que existiere disposición constitucional que indique a cuál debe adscribirse o vincularse; que la decisión de adscripción no implica que el órgano adscrito deba permanecer a perpetuidad en el órgano al que se adscribe, pues, si las circunstancias cambian, por ejemplo, que desaparezca el Ministerio, o que se le asignen nuevas funciones, etc., estos hechos obligan al legislador a realizar los cambios pertinentes; y, que decisiones tanto de vincular o de adscribir una entidad a otra, es el resultado del debido entendimiento del artículo 113 de la Carta en lo que concierne a las funciones separadas de los órganos del Estado pero con la colaboración armónica, encaminada a lograr sus fines...”

g. Respecto de la falta de relación jerárquica derivada de la adscripción de las entidades descentralizadas a los diferentes ministerios y departamentos administrativos, cabe traer a colación la explicación dada por el Dr. Álvaro Tafur Galvis en salvamento de voto de la sentencia C-1437 de 2000, en el que destacó que se podía afirmar de manera general que

“... tanto la adscripción como la vinculación, en la configuración legal actual, que continúa la tradición normativa que data de 1968 (D.L. 1050/68), denotan grados de relación de dependencia no jerárquica que se predicen entre organismos principales de la administración y organismos que, no obstante tener reconocida autonomía administrativa – ostenten o no personalidad jurídica –, deben actuar bajo la orientación y coordinación de aquellos...”

h. En consecuencia, dejando en claro que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC no es una entidad subordinada jerárquicamente al Ministerio de Justicia y del Derecho; es evidente que no hay lugar a derivar responsabilidad a la cartera ministerial que represento por cualesquiera eventuales errores cometidos por el INPEC

IV. NOTIFICACIONES.

4.1. El ministerio de Justicia y del Derecho recibe las notificaciones personales y los mensajes de datos de que trata el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 en el buzón electrónico notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co

4.2. El suscrito apoderado de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 solicito y acepto expresamente que las providencias me sean notificadas a través de medios electrónicos, para lo cual manifiesto que recibo las correspondientes providencias en el buzón electrónico alfgomez@minjusticia.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

67

V. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:

Para que se reconozca personería jurídica a fin de actuar en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, me permito anexar el poder y sus anexos.

Sin otro particular por el momento, me suscribo atentamente de la señora Juez.

ALFREDO GÓMEZ GIRALDO

C.C. 6.422.715 de Restrepo Valle

T. P. de Abogado 88.907 del C. S. de la J.

Señores

Juzgado Diecisiete Administrativo de Cali.

Asunto.

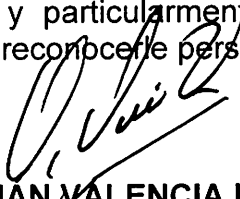
Radicado: 2016-00368Actor: Jaime Romero y otros

Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho


Medio de control: Reparación Directa


OSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.063.629, en mi condición de Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con la Resolución No. 0669 del 05 de septiembre de 2017 y acta de posesión No. 0083 del 05 de septiembre de 2017, en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 0679 del 05/09/2017; manifiesto que confiero **PODER** especial al doctor ALFREDO GÓMEZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.422.715 de Restrepo Valle y Tarjeta Profesional No. 88.907 del Consejo Superior de la Judicatura, para que defienda los intereses de la Nación dentro de la actuación relacionada en el asunto.

El apoderado queda facultado para realizar las actuaciones conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y particularmente las de sustituir, reasumir, transigir y conciliar. Solicito a usted reconocerle personería.


OSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA
C.C. No. 8.063.629


Acepto:


ALFREDO GÓMEZ GIRALDO
C.C. No. 6.422.715 de Restrepo Valle
T.P. No. 88.907 del C.S.J.


 **Ministerio de Justicia y del Derecho**
Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para Juzgados Civiles,
Laborales y de Familia

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por: Oscar Julián Valencia Loaiza
Quien se identificó con C.C. No. 8.063.629
I.P. No. 2705-02 Bogotá D.C.
Responsable Centro de Servicios: _____


Yvette Viviana Arenas Beltrán

 **Ministerio de Justicia y del Derecho**
Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para Juzgados Civiles,
Laborales y de Familia

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por: Alfredo Gómez Giraldo
Quien se identificó con C.C. No. 6.422.715
I.P. No. 88907 Bogotá D.C. 2705-02
Responsable Centro de Servicios: _____


Yvette Viviana Arenas Beltrán

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIÓN NÚMERO **0679**

DE **05 SEP 2017**

"Por la cual se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones"

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1427 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1427 de 2017, "[p]or el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho" dispone en su artículo 8 que son funciones de la Dirección Jurídica:

- (i) "[r]epresentar judicial y extrajudicialmente al Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, mediante poder o delegación recibidos del Ministro, así como supervisar el trámite de los mismos";
- (ii) "[r]epresentar al Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de interviniente, en los procesos judiciales de extinción de dominio en defensa del interés jurídico de la nación y en representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento, así como hacer seguimiento y ejecutar los actos procesales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia" y,
- (iii) "[d]irigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro a través de este proceso de los derechos de crédito que a su favor tenga el Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con la normatividad vigente".

Que en desarrollo de los principios de economía y celeridad, para hacer más ágil la actuación del Ministerio de Justicia y del Derecho ante las instancias judiciales, representarlo en los procesos judiciales de extinción de dominio, en los que actúe en calidad de interviniente, así como el cobro de los créditos exigibles a su favor, resulta necesario delegar la facultad de adelantar algunas actuaciones.

Que en mérito de lo expuesto;

Continuación de la Resolución "Por la cual se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones"

RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en el Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0100, Grado 22 la representación judicial en los procesos de tal naturaleza en los cuales deba actuar la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho.

Parágrafo. La delegación señalada en este artículo comprende todas las facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial, como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presentar memoriales y/o recursos, conciliar prejudicial y judicialmente en los procesos a que haya lugar, de conformidad con las normas que rigen la conciliación en materia administrativa, especialmente las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009 y las normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan y, en general, todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas.

Artículo 2.- Delegar en el Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0100, Grado 22 la representación judicial de esta cartera ministerial, en calidad de interviniente, en los procesos judiciales de extinción de dominio, en los cuales deba actuar.

Parágrafo. La delegación señalada en este artículo comprende todas las facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial en calidad de interviniente en los procesos de extinción de dominio, como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presentar memoriales y/o recursos y, en general, todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas.

Artículo 3.- Delegar en el Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Código 0100, Grado 22 el ejercicio de la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 4.- Vigencia y derogatoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 0004 de 11 de agosto de 2011 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

05 SEP 2017


ENRIQUE GIL BOTERO

Elaboró y revisó: Óscar Julián Valencia Loaiza

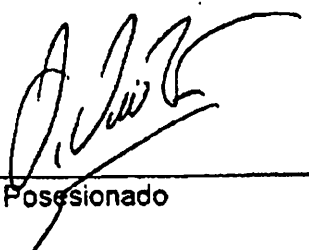
 MINJUSTICIA	FORMATO ACTA DE POSESIÓN	CÓDIGO: F-THAD-01-02
		VERSIÓN: 02

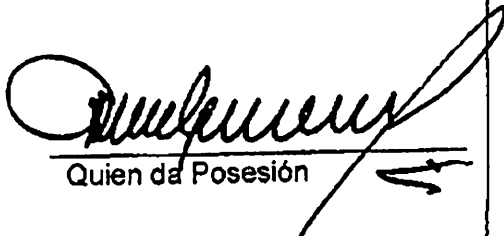
Acta de Posesión No: 0083 Bogotá D.C., 05 SEP 2017

Se presentó en el Despacho del Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho el doctor **OSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.063.629, con el fin de tomar posesión del cargo de Director Técnico de Ministerio, Código 0100, Grado 22, de la Dirección Jurídica; para el cual se nombró con carácter ordinario mediante Resolución No. 0669 del 05 de septiembre de 2017, con una asignación básica mensual de \$8.401.871,00.

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política. Manifestó, bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para el desempeño de empleos públicos establecidas en la Constitución Política y en la legislación vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.7.4 del Decreto 1083 de 2015, solo se exige la presentación de la cédula de ciudadanía.


El Posesionado


Quien da Posesión

Elaboró: Martha Isabel Cárdenas Pérez

Revisó: Luis Francisco Forero Sánchez

Aprobó: Álvaro Gómez Trujillo

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

RESOLUCIÓN NÚMERO **0669** DE **05 SEP 2017**

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario en la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 1º del Decreto 1338 de 2015 y el numeral 13 del artículo 6º del Decreto 1427 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 "Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley".

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida del doctor **Óscar Julián Valencia Loaiza**, el Secretario General, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Director Técnico de Ministerio, Código 0100, Grado 22, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las normas vigentes y con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar con carácter ordinario al doctor **Oscar Julián Valencia Loaiza**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.063.629, en el cargo de Director Técnico de Ministerio, Código 0100, Grado 22, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. **05 SEP 2017**

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

ENRIQUE GILBOTERO

Elaboró: María Isabel Cancelado Páez
Revisó: César Francisco Forero Sánchez
Aprobó: Alvaro Gómez Trujillo